

19-20

REDACCION

Edmundo Aray
Efraín Hurtado
Héctor Malavé Mata
Mauro Bello

Apartado postal 51472
Caracas, Venezuela
26 de Marzo de 1970
26 de Abril de 1970

OTRA VEZ SIENTO BAJO MIS
TALONES
EL COSTILLAR DE ROCINANTE:
VUELVO AL CAMINO
CON MI ADARGA
AL BRAZO.

CHE



CONCESIONES Y CONTRATO DE SERVICIOS EN SU ESENCIA UN MISMO SISTEMA DE ENTREGA DEL PETROLEO A LOS TRUSTS INTERNACIONALES

I

En 1829, el 24 de Octubre, el LIBERTADOR instituyó por Decreto que era de la propiedad exclusiva de la Nación su subsuelo y todo lo en él contenido, derivándose de ese Decreto la Legislación Minera que nos ha regido, a pesar del silencio en que a través del tiempo transcurrido lo han mantenido las clases dominantes con fines de lucro inconfesables. Hasta 1896, por ejemplo, el Código Civil, violando ese Decreto, estatuyó que el propietario del suelo lo era asimismo del subsuelo. Ninguna de las Constituciones, incluida la de 1961, consagró categóricamente la propiedad exclusiva de la Nación sobre su subsuelo.

En el Reglamento del Código de Leyes de Minas de 1854, se estableció que: "ninguno podrá beneficiar —las minas— sin CONCESION del Poder Ejecutivo en la forma que se dispone en las Leyes del Código de Minas..." disposición que dio origen al régimen de concesiones, ratificado por la vigente Ley de Hidrocarburos, sancionada en 1943, al estatuir en su Artículo 3º que:

"El DERECHO de explorar con carácter exclusivo, y el de explotar, manufacturar o refinar y transportar por vías especiales las sustancias a que se refiere el Artículo 1º, PODRÁ ejercerse directamente por el Ejecutivo Nacional u obtenerse por medio de CONCESIONES que éste otorgue conforme a la presente Ley... etc."

es decir, que el petróleo PODRA ser extraído, explotado, manufacturado, transportado

- a) directamente por el Ejecutivo Nacional o
- b) por medio de concesiones que éste otorgue a particulares, por lo que los Contrato de Servicios, por involucrar la RENUNCIA del Ejecutivo Nacional a explotar, manufacturar, transportar, vender DIRECTAMENTE el petróleo objeto del contrato, son, en esencia, una concesión independientemente de las diferencias que pudieran señalarse en las cláusulas de una y otra figura jurídica —duración o término, participación, etc.—, o de que la concesión la otorga el Ejecutivo o éste celebre el Contrato de Servicio por intermedio de la Corporación Venezolana del Petróleo, a quien previamente le ha "asignado" el yacimiento en cuestión.

II

Desde la muerte de Juan Vicente Gómez, en 1936, las fuerzas progresistas, nacionalistas han venido pronunciándose contra el otorgamiento de nuevas concesiones, habiendo sido objeto el Gobierno del General Medina Angarita de las más duras críticas por las que otorgó en los años 1944 y 1945 y motivo de enardecimiento de oposición al sátrapa Pérez Jiménez por haber éste entregado a los trusts petroleros, mediante licitaciones en 1956 y

1957, valiosos lotes en reservas nacionales. Estos antecedentes indujeron en 1958 a los partidos de la coalición "Punto Fijo", a enarbolar demagógicamente la consigna de "no-más concesiones". Pero posteriormente y en consideración de ese hecho de tanta vigencia histórica y, por otra parte, a que si se sacaban a licitación concesiones en reservas nacionales tendrían que ser ofrecidas ventajas especiales superiores a las impuestas por Pérez Jiménez en 1956 y 1957, lo que les resultaría demasiado oneroso, los personeros de los trusts petroleros conjuntamente con los del gobierno, formularon una "nueva política", la llamada de "sustitución" de la consigna de "no-más concesiones" por la de "celebración de contrato de servicios", transplantando así a Venezuela la forma de explotación que en 1958 habían implantado los trusts petroleros en la Argentina con el concurso del Presidente Frondizzi. Tales "Contrato de Servicio", por



sus intrínsecas características, no significarán —como lo han proclamado quienes los auspician— la sustitución del actual sistema de concesiones, sino que con esos "contratos" se operará una mera sustitución de la forma del otorgamiento, ya que conllevan, camuflada con la ficción de una "soledad", la entrega de nuestro petróleo a los consorcios extranjeros y, seguramente, en condiciones más favorables para ellos. Con la celebración de "Contrato de Servicios" se consolidará y reforzará la dependencia de los trusts extranjeros, se impedirá el desarrollo independiente de una industria petrolera propia, nacional.

La CVP celebró en 1962 un "contrato de servicios" con la Mobil y el 18 de octubre de ese mismo año, otro con la Mene Grande. Este último es típico de lo que persiguen los trusts con la "sustitución". La CVP se comprometió con la Mene Grande a perforar un pozo en parcela de reserva nacional que le había sido "asignada" por el Ejecutivo Nacional en el campo Ceuta, Estado Zulia, así como a entregarle muestras de las arenas y demás datos que se fueran obteniendo a medida que avanzara la perforación. Si el pozo resultaba comercial, la Mene Grande donaría a la CVP una suma equivalente al 10% del costo del pozo, la que nunca podría ser mayor de 500.000 bolívares. Si el pozo se evidenciaba no-comercial, todos los gastos y costos correrían por cuenta de la CVP, por lo que la

Mene llevaba todas las de ganar, ya que las muestras de arenas y demás datos que debía suministrarle la CVP le permitirían conocer la situación del subsuelo y la orientación del yacimiento, preciosa información que de no haber sido celebrado ese contrato, le hubiera costado tanto cuanto fue invertido en la perforación de ese pozo. En representación de la Mene Grande firmó ese contrato el Ingeniero L. Alcalá Sucre.

Entre tanto, el movimiento popular argentino derribó del poder al Presidente Frondizi, acusándolo de traidor por haber celebrado "Contrato de Servicios" con los consorcios extranjeros. Impresionados por advertencia tan elocuente, los funcionarios del Ministerio de Minas e Hidrocarburos de mutuo acuerdo con los personeros de la Standard Oil y de la Shell —los mismos trusts activos en la Argentina—, resolvieron aplazar para mejor ocasión las negociaciones en marcha, limitándose el Ministerio a formular declaraciones en el sentido de que se "estaban estudiando los proyectos de "Contrato de Servicios" y que, en todo caso, para llevar a cabo la celebración de los mismos, previamente deberían ser aprobados por el Congreso Nacional. Años después, tanto el Ministro Dr. Pérez Guerrero como su sucesor, doctor Mayobre, considerando el momento favorable, activaron la política de "sustitución" y, para obviar el trámite dispuesto por el Artículo 126 de la Constitución:

"Sin la aprobación del Congreso, no podrá celebrarse ningún contrato de interés nacional, SALVO los que fueren necesarios para el normal desarrollo de la administración pública o LOS QUE PERMITA LA LEY... etc..."

el Dr. Mayobre elaboró un anteproyecto de modificación del Artículo 3° de la Ley de Hidrocarburos, el cual discutió y sancionó al Congreso con inusitada rapidez el 20 de julio de 1967:

"Artículo 3° — El derecho de explotar con carácter exclusivo y el de explotar, manufacturar o refinar y transportar por vías especiales las sustancias a que se refiere el Artículo 1° podrá ejercerse:

"1. Directa y exclusivamente por el Ejecutivo Nacional
"2. Por Institutos Autónomos y Empresas de la propiedad exclusiva del Estado EN LAS QUE ESTE CONSERVE POR LA LEY EL CONTROL DE LAS DECISIONES, A QUIENES ESOS DERECHOS SEAN TRANSFERIDOS. Tales derechos no podrán ser enajenados, gravados ni ejecutados. En este caso recibirán las siguientes normas:

" b) A los organismos antes nombrados les estará permitido, para la realización de tal ejercicio, celebrar convenios y promover empresas mixtas y formar parte de ellas, siempre que los términos y condiciones que se estipulen en cada contrato sean más "favorables para la nación que los previstos para las concesiones en la presente Ley. Estos convenios no conferirán derechos reales sobre los yacimientos.

" c) Las Cámaras en sesión conjunta, debidamente informadas por el Ejecutivo Nacio-

nal de todas las circunstancias pertinentes, APROBARAN las bases de contratación dentro de las condiciones que fijen, etc. etc.
"3. Por medio de concesiones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 126 de la Constitución. Las concesiones de exploración y explotación y de la explotación prevista en esta Ley, no confieren la propiedad de los yacimientos, sino el derecho real inmueble de explorar el área concedida y de explotar, por tiempo determinado, los yacimientos que se encuentren en ella de acuerdo con esta Ley y con el título de la concesión. Este derecho puede ser objeto de hipoteca.

Con esa modificación, el Congreso ya no tendrá que aprobar expresamente cada uno de los "Contrato de Servicios", sino "debidamente informado por el Ejecutivo, aprobar las bases mínimas generales de contratación dentro de las condiciones que fije" por las cuales se regirán todos los contratos. Superado ese escollo, el Ministro de Minas e Hidrocarburos y la CVP dieron curso a la preparación del complejo procedimiento de escogencia de áreas, de negociaciones con los trusts extranjeros, presentación de ofertas, etc. que culminaría en la elaboración de las Bases Mínimas a presentar al Congreso. Y desde que fueron remitidas en septiembre 1969, en el Congreso se ha venido realizando un truculento saínete en el que los representantes de todos los partidos políticos, mientras intercambian virulentas acusaciones y se proclaman sin distinciones, los verdaderos defensores de los intereses nacionales, negocian en las trastienda del quorum requerido.

III

Para el más cabal conocimiento de esas Bases Mínimas, insertamos el texto de las principales y esenciales:

"4. NATURALEZA DE LOS CONTRATOS

" El contrato será de servicio directo, según el cual la contratista se obliga a explorar suficientemente a su exclusivo riesgo el área contratada y a extraer el petróleo recuperable, ENTREGANDOLO a CVP, la que a su vez TRASPASARA a la contratista una cantidad que se fijará en el contrato y que no será mayor del noventa por ciento (90%) de la producción, para su venta en el exterior".

Esa obligación que la CVP contrae de TRASPASAR a la contratista el 90% del petróleo que sea extraído para que lo venda en el mercado externo, asegura, garantiza a los trusts la hegemonía sobre nuestro petróleo y en condiciones más ventajosas para ellos, pues la concesión obliga al concesionario a entregar *en especie* la regalía o "royalty" al Ejecutivo Nacional. En lo que respecta a concesiones ordinarias, la vigente Ley de Hidrocarburos fija esa regalía en 16-2/3% de la producción, pero en las que sean otorgadas en reservas nacionales, ese porcentaje puede ser aumentado, como ya tuvo lugar, a 20,25 o más por ciento de la producción. Debe tenerse presente que a los trusts no

les interesa la extracción en sí del petróleo, sino disponer del que sea extraído para refinarlo o venderlo —su comercialización—, operaciones que son las que originan las fabulosas ganancias que perciben y, con los "Contratos de Servicios", controlarán el 83-1/3%, el 80% o el 75%, sino el 90%. Si hasta ahora, debido a su complaciente política de entrega del petróleo a los trusts, el Ejecutivo Nacional ha preferido optar por recibir la regalía en efectivo, vendiéndola al concesionario a precios calculados conforme a acuerdos establecidos con anterioridad, ello no quiere decir que hasta 1983, término de vencimiento de las existentes concesiones, un otro Ejecutivo resuelva instaurar la política de recibir en especie la regalía para directamente vender crudos y derivados en el mercado interno y en el externo, limitando en esa medida la hegemonía detentada de los trusts; política ésta cuya aplicación IMPEDIRIA, de ser celebrados los "Contrato de Servicios" y en cuanto al petróleo que en esa forma fuera extraído, la Base 17 —REGIMEN IMPOSITIVO—:

"Las actividades objeto de los contratos estarán sometidas a todos los impuestos, contribuciones y demás obligaciones fiscales establecidas en la Ley de Hidrocarburos u otras leyes, con las limitaciones contempladas en la primera parte del Artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos. El impuesto de explotación —la REGALIA o "royalty"— será calculado tomando como base los precios de referencia para regalía de los convenios sobre hidrocarburos similares. Este impuesto, como los otros previstos en la Ley de Hidrocarburos, SERA PAGADO por la contratista por cuenta y orden de la CVP y formará parte de los costos de producción del petróleo..."

ya que esa Base conlleva la renuncia expresa del Ejecutivo Nacional a percibir en especie la regalía, legalizando, podríamos decir, la anti-nacional práctica que hasta ahora le ha asegurado a los trusts su control hegemónico sobre todo el petróleo que ha sido extraído de nuestro subsuelo.

Los trusts internacionales siempre han perseguido controlar todo el petróleo que sea extraído en nuestros países y, no por el prurito de acumularlo en gigantescos tanques, sino precisamente para refinarlo y venderlo, para comercializarlo. Resulta por tanto, ingenua para no usar el término apropiado, la Base 12 —MERCADEO—:

"La contratista se compromete a "colocar en el mercado externo la cantidad de petróleo recibida de "CVP de conformidad con lo establecido en el número 4 de estas Bases. Se compromete igualmente a entrenar en su organización de "ventas externas al personal designado por CVP..."

compromiso final que bien parece haber sido inspirado por Penaloza-Mito-Juan y su lema de "venezolanizar la explotación del petróleo mediante el ascenso de venezolanos a los Comités Directivos de las compañías", como si hasta ahora, en lo general, la participación de venezolanos en cargos de responsabilidad de las compañías hubiera tenido otro resultado que el de una más eficiente defensa de los intereses de las compañías en delictuoso de-

trimento de los permanentes de la Nación.

IV

Es evidente que con la celebración de "Contrato de Servicios", lo que se "sustituye" es la forma de otorgar las concesiones, con ventajas apreciables para los trusts internacionales, y no podría ser de otra manera, pues fueron ellos los que fraguaron esa figura jurídica en 1958 y quienes la impusieron en la Argentina con la complicidad traidora de Frondizzi.



El petróleo yacente en los yacimientos sobre los cuales no existan concesiones otorgadas, debe ser reservado para que la Nación directamente lo extraiga, abastezca el mercado interno y venda en el exterior crudos y derivados. Con esa finalidad debe ser activamente desarrollada la CVP, incorporándole, además, a su dominio los yacimientos que por mandato de la Ley los concesionarios deberán revertir a la Nación en 1983.

Ahora se trata de unas delimitadas áreas en el sur del Lago de Maracaibo, pero para sentar un precedente, pues ya el Gobierno mantiene conversaciones y negociaciones con los trusts —incluso se ha autorizado a la Shell a realizar exploraciones en zonas reservadas— en torno a los yacimientos del Golfo de Venezuela, Zona Bituminosa de Oriente, sobre todo el petróleo que pueda ser localizado en el subsuelo de nuestro país.

Deber impostergable de las fuerzas progresistas es, por consecuencia, luchar con calor, entusiasmo y por todos los medios, porque sean explotados directamente por la Nación los recursos naturales no-renovables, el petróleo y el gas entre ellos; por la independencia económica del país, por la liberación nacional.

¡No-más concesiones, ni legales ni disfrazadas!

Abril 14 de 1970.

~~SALVADOR DE LA PLAZA~~

